



Resolución de Superintendencia

N° 1176 -2018-SUCAMEC

Lima, 21 DIC 2018

VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto el 19 de noviembre de 2018 por el señor **Cristhian Luigi Chauca Ascencio**, en contra de la **Resolución de Gerencia N° 6921-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 07 de noviembre de 2018**, el Dictamen Legal N° 00525-2018-SUCAMEC-OGAJ de fecha 20 de diciembre de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127, se creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, conforme a la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1127, toda referencia a la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC que contengan las normas vigentes, se entenderá referida a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante, SUCAMEC);

Que, el literal t) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-IN, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN, establece como una de las funciones del Superintendente Nacional, resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra actos administrativos emitidos por los órganos de línea y desconcentrados de SUCAMEC;

Que, el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, señala que: *“El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas ofrecidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho (...)”*;

Que, por **Resolución de Gerencia N° 6921-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 07 de noviembre de 2018**, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, desestimo la solicitud de inicial de uso de arma de fuego en la modalidad de seguridad privada, presentada por el señor **Cristhian Luigi Chauca Ascencio** (en adelante el administrado), por registrar antecedente histórico de condena por delito doloso;

Que, con fecha 19 de noviembre de 2018, el administrado interpuso Recurso de Apelación contra la **Resolución de Gerencia N° 6921-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 07 de noviembre de 2018**;

Que, el administrado interpone su recurso administrativo señalando que la resolución impugnada es arbitraria en todos sus extremos toda vez que se contrapone a los artículos 69 y 70 del Código Penal sobre rehabilitación, y a los artículos 51 y 128 de la Constitución Política del Perú, sobre la supremacía de la Constitución sobre toda norma legal y que de existir



J. DULANTO



V.B°
C. Verástegui

incompatibilidad entre una norma constitucional y otra legal, los jueces prefieren la primera. Asimismo refiere que se contrapone a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú que establece como regla general que toda norma es irretroactiva, es decir que se aplica para hechos futuros, sin embargo es posible la retroactividad benigna sólo en materia penal cuando favorece al reo. Señala también que la resolución impugnada no está motivada con mención expresa de la ley aplicable y sus fundamentos de hecho. De la misma manera precisa que sobre el Registro de Antecedentes Penales que corre ante el 037 Juzgado Penal de Lima, en el cual fue condenado a 03 años de pena condicional, por delito de Estafa Genérica, artículo 361 del Código Penal, el ya cumplió con dicha pena y oportunamente quedo con resolución de rehabilitación, habiéndose borrado todo tipo de antecedente penal, judicial y policial. Asimismo manifiesta también que una persona no puede ser sancionada por un mismo hecho dos veces y en este caso se pretende hacer una doble sanción, en tal sentido se estaría vulnerando el principio de "non bis ídem" donde determina una interdicción de duplicidad de sanción administrativa y penal, respecto de un mismo hecho;

Que, respecto de lo argumentado por el administrado debemos indicar que la expresión del "debido proceso" en sede administrativa se sustenta en el principio del Debido Procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS por medio del cual: "*Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten*". La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo, el mismo que se ha respetado en la tramitación del presente expediente;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, refiere que: "*La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado*". A su vez, tal como lo explica el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 04123-2011-PA/TC, para su validez "*El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto (...)*", por lo que en el presente caso concreto el acto administrativo ahora impugnado se encuentra debidamente motivado;

Que, el numeral 1.4 del artículo IV, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre principio de razonabilidad, refiere que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. A su vez, tal como lo explica el Tribunal Constitucional en el



J. DULANTO



C. Verástegui



Resolución de Superintendencia

Expediente N.º 00535-2009-PA/T, la razonabilidad “es un criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la esencia misma del Estado constitucional de derecho. Se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido este Colegiado, esto **“implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos”** (...). (Los subrayados y negrita son agregados);

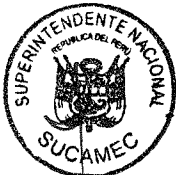
Que, el numeral 1.1 del artículo IV. del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, sobre Principio de Legalidad establece que las autoridades administrativas **deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho**, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas, es así que tal como refiere el Tribunal Constitucional en el Expediente N.º 3741-2004-AA/TC: “(...) el principio de legalidad en el estado constitucional **no significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales** (...)”. (Los subrayados y negrita son agregados). Esta forma de concebir el principio de legalidad se concreta cuando se hace referencia a que la actuación de la administración pública tiene como finalidad la protección del interés general, siendo ello sólo posible de ser realizado garantizando los derechos e intereses de la administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, en relación al Principio de Legalidad, Cervantes Anaya refiere que está en concordancia con el aforismo romano “*legem patere quam feciste*” que significa soporta la ley que hiciste, es decir se exige al Estado y por ende a la Administración Pública que soporte la ley que hizo, ya que el Estado debe ser paradigma en el cumplimiento del derecho. Por legalidad y objetividad normativa o reglada debemos comprender **la observancia estricta del texto legal**. Este principio es el soporte fundamental del Estado de Derecho y anuncia que la Administración actuará siempre ciñéndose estrictamente a la norma legal, es decir a la ley y al resto del ordenamiento jurídico;

Que, de esta manera la autoridad administrativa al adoptar sus decisiones debe actuar sin sobrepasar los límites de la atribución conferida por la ley, observando la proporción entre los medios a emplear y **los fines públicos bajo su tutela**, de tal manera que la decisión tienda a su cometido, ciñéndose estrictamente a la norma legal, por lo que en el caso de la resolución impugnada no se han vulnerado los artículos 51, 70, 103 y 128, ni el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú a que hace referencia el administrado;

Que, el artículo 42 del Reglamento de la Ley N.º 30299 Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil refiere que la SUCAMEC deniega o desestima la solicitud de licencia de uso de arma de fuego cuando el solicitante no cumpla con las condiciones o requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N.º 30299 establece como condición para la obtención y renovación de licencias y autorizaciones: “**No contar con antecedente penal por delito doloso se refiere a que el solicitante de una autorización o licencia ante la SUCAMEC, no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por este tipo de delitos**. Conforme lo dispone literal b) del artículo 7 de la Ley, la rehabilitación regulada por los artículos 69 y 70 del Código Penal no resulta aplicable para la evaluación y consultas a cargo de la SUCAMEC” (Subrayado y negrita agregados);



J. DULANTO



C. Verrástegui

Que, asimismo el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento de la Ley N° 30299 establece señala que: *“En caso la cancelación se sustente en supuestos distintos al vencimiento de la licencia, como aquellos supuestos contemplados en la tabla de sanciones, o por mandato de autoridad jurisdiccional o autoridad competente, quien fue su titular pierde la autorización de uso y porte de arma de fuego y está obligado a depositar de manera definitiva el arma en los almacenes de la SUCAMEC en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación del acto administrativo firme que resuelve la cancelación”;*

Que, respecto de la cancelación y anulación de los antecedentes penales y judiciales para efectos del otorgamiento de la licencia de posesión y uso del arma de fuego, estos no perderán vigencia aun cuando se haya cumplido la condena o se haya emitido una resolución de rehabilitación de la persona, ya que el solicitante no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial, tal como se desprende del **Oficio N° 129803-2018-B-WEB-RNC-GSJR-GG de fecha 19 de octubre de 2018**, del Jefe de Registro de Condenas de la Gerencia General del Poder Judicial, donde consta que el administrado registra antecedentes en el 037 Juzgado Penal de Lima, siendo por ello que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos le denegó su solicitud;

Que, de igual manera el numeral 11 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, sobre principios de la potestad sancionadora administrativa, señala que la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: *“11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento”*, sin embargo debe precisarse que no se puede argumentar el non bis in idem cuando se imponga una sanción penal y otra administrativa, en cuanto el Derecho Penal y el Derecho Administrativo protegen distintos bienes jurídicos, más aún cuando en el presente caso la SUCAMEC ha desestimado la solicitud de licencia de uso de arma de fuego por que el solicitante no ha cumplido con la condición establecida en el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299;

Que, estando a lo expuesto en el Dictamen Legal N° 00525-2018-SUCAMEC-OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, corresponde declarar desestimado el Recurso de Apelación interpuesto contra la **Resolución de Gerencia N° 6921-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 07 de noviembre de 2018**; asimismo, conforme establece el numeral 6.2, artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, el precitado dictamen debe ser notificado en forma conjunta con el acto administrativo que resuelve el presente recurso;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127 que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, y el Decreto Supremo N° 004-2013-IN que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN;



J. DULANTO



V.P.B.
C. Verástegui



Resolución de Superintendencia

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar desestimado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor, Cristhian Luigi Chauca Ascencio contra la Resolución de Gerencia N° 6921-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 07 de noviembre de 2018 emitida por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la SUCAMEC, dándose por agotada la vía administrativa.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la SUCAMEC cumpla con lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución de Gerencia N° 6921-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 07 de noviembre de 2018.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.sucamec.gob.pe).

Artículo 4.- Notificar la presente resolución y el dictamen al señor Cristhian Luigi Chauca Ascencio y poner de conocimiento de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la SUCAMEC para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.

.....
JUAN ALBERTO DULANTO ARIAS
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC



193°
C. Verástegui